

## JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE POPAYÁN

**EXPEDIENTE:** 2021-00573-00

**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL

**DEMANDANTE:** SOCIEDAD MÉDICA RIONEGRO S.A. "SOMER S.A.

**DEMANDADO:** ASMET SALUD EPS

### AUTO N° 1861

Popayán, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

#### ASUNTO A TRATAR:

Entra el Despacho a definir sobre la admisión del proceso que por fuere rechazado por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, argumentado falta de competencia.

#### CONSIDERACIONES:

El Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, para fundamentar jurídicamente su rechazo de plano acude a una providencia dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al resolver un conflicto de competencia, en el cual, el Alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria estableció:

*"Hasta hace poco, en los asuntos **en que se pretendía la ejecución de obligaciones del sistema de seguridad social** representadas en títulos valores, esta Sala Plena atribuía la competencia a la especialidad laboral, de conformidad con el artículo 5, numeral 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibídem. Sin embargo, luego de un nuevo estudio, dicha tesis fue recogida mediante decisión de 23 de marzo de 2017 (APL2642-2017, rad. 2016-00178), en virtud de la cual se adjudicó dicho conocimiento a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.*

*Los fundamentos fueron los siguientes:*

*Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como*

así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:

(...)

Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

(...).

Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.

Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, (...), la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, **la competencia para conocer de la demanda ejecutiva**, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.

(...)

Sin embargo, un nuevo análisis de la situación que plantea el conflicto que ahora reclama la atención de la Corte, hace necesario recoger dicha tesis y, en lo sucesivo, **adjudicar el conocimiento de demandas ejecutivas como la que originó este debate, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil**, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen. (Subrayado y resaltado fuera de texto)

Ahora bien, descendiendo al plenario, tenemos que resaltar que la entidad accionante planteó los siguientes hechos:

**"PRIMERO.** LA SOCIEDAD MÉDICA RIONEGRO S.A., prestó los servicios profesionales de salud a pacientes afiliados a ASMET SALUD EPS S.A.S., por dichas atenciones se generaron las siguientes facturas, las cuales no han sido canceladas por la demandada:

**SEGUNDO.** LA SOCIEDAD MÉDICA RIONEGRO S.A., prestó dichos servicios con la respectiva solicitud de autorización de servicios a pacientes afiliados a la EPSS.

**TERCERO.** Las facturas pretendidas en esta demanda fueron radicadas en las instalaciones de ASMET SALUD EPS S.A.S.

**CUARTO.** En el cuadro del hecho PRIMERO se detalla, en la columna denominada "FACTURA" el número de la factura radicada; en la entidad responsable del pago y en consecuencia, el día a partir del cual se contarán los términos establecidos por la ley 1438 de 2011.

**QUINTO.** Las facturas debieron haber sido cancelada por parte de ASMET SALUD EPS S.A.S. a los treinta (30) días calendario a su fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. O hacer la respectiva objeción, glosa o devolución de la factura.

**SEXTO.** ASMET SALUD EPS S.A.S. glosó cada una de las facturas relacionadas en el hecho primero, por diferentes causales. Como se evidencia en la relación de glosas aportada.

**SÉPTIMO.** Las glosas fueron subsanadas por LA CLÍNICA SOMER, toda vez que se aportaron los soportes de acuerdo a la normatividad del sector salud. Por tal razón radicó nuevamente las facturas en las instalaciones del ente territorial.

**OCTAVO.** Vale la pena aclarar que todos los pacientes ingresaron por el servicio de urgencias y de conformidad con los artículos 168 de la ley 100 de 1993, 16 del decreto reglamentario 806 de 1998 y 67 de la ley 715 de 2001, la atención inicial de urgencias debe ser prestada por todas las IPS y todas las entidades administradoras de planes de beneficios o responsables de los pacientes, están obligadas a pagar a las IPS por esos servicios".

La entidad demandante, en el mismo libelo introductorio presentó las siguientes pretensiones:

"PRIMERA: **Que se declare** que ASMET SALUD EPS S.A.S., tiene la obligación de cancelar a SOCIEDAD MÉDICA RIONEGRO S.A. "SOMER S.A." el valor pendiente por pago de las facturas relacionadas en los hechos de la demanda, que fueron objetadas y que son su responsabilidad.

SEGUNDA: Que, en consecuencia, **se acumule el valor del SALDO de cada una de las facturas relacionadas** y se condene a ASMET SALUD EPS S.A.S., a pagar a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$3.676,843). Correspondiente al valor adeudado por las facturas relacionadas en los hechos de esta demanda.

**TERCERA: Que se establezca por parte del juzgado el día a partir del cual se hicieron exigibles las facturas pretendidas en esta demanda y el respectivo monto**, el cual solicitamos que sea la fecha de vencimiento de las facturas, la cual se cuenta a 30 días después de la radicación según el artículo 23 del decreto 4747 de 2007.

**CUARTA: Que, con base en la declaratoria de la pretensión TERCERA, se condene a ASMET SALUD EPS S.A.S. al pago de los intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida, desde el día siguiente al que el Juzgado declare como exigibles las facturas y sobre el monto establecido** por el mismo juez; y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación. Esto según el Decreto Ley 1281 de 2002, artículo 4 y el Decreto 723 de 1997, artículo 10” (Subrayado y resaltado fuera de texto)

Considera este juzgado, que la lectura conjunta de los hechos y las pretensiones de la demanda inobjetablemente demuestran que la acción incoada por el accionante es totalmente declarativa y no ejecutiva, como erróneamente lo asume el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad.

Nótese, por ejemplo, que en las pretensiones primera y segunda solicita al juzgado que defina el valor pendiente de pago por las facturas, mientras que en la tercera pretensión, requiere que se establezca por parte del juzgado la fecha de exigibilidad de los títulos valores ya mencionados, expresiones que chocan abiertamente en contra de las exigencias que establece la ley procesal civil sobre la claridad y exigibilidad de los títulos ejecutivos<sup>1</sup>. Para expresarlo de una forma más simple, resulta imposible

---

<sup>1</sup> Sobre el tema de la claridad de la obligación contenida en el título ejecutivo, los tratadistas ALFONSO PINEDA RODRÍGUEZ e HILDEBRANDO LEAL PÉREZ, en su obra “El título ejecutivo y los procesos ejecutivos”. Pag 121. Editorial Leyer, han sostenido lo siguiente:

*“La claridad de la obligación tiene que ver con su evidencia, su comprensión. Jurídicamente hablando, la claridad de la obligación se expresa en la determinación de los elementos que componen el título, es decir, que a los ojos de cualquier persona se desprenda a ciencia cierta que el documento contentivo de la obligación reúne los elementos propios de un título ejecutivo, **sín que sea necesario acudir a otros medios distintos de la mera observación.** Por ello, genéricamente hablando, la obligación es clara cuando es indubitable, o sea, que aparezca de tal forma que a la primera lectura del documento se vea nítida, fuera de toda oscuridad o confusión. **La claridad de la obligación debe estar no solo en la forma exterior del documento respectivo, sino más que todo en el contenido jurídico de fondo;** pero como la obligación es un ente complejo que abarca varios y distintos elementos, como el objeto, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la causa, la claridad de ella ha de comprender todos*

aceptar que el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales haya interpretado la demanda asumiendo que en ella se incoaba una pretensión ejecutiva cuando el mismo actor está indicando que la obligación a cargo de Asmet Salud carece de claridad y de fecha de exigibilidad, y que fue justamente lo indefinido y discutible de su derecho, la que lo llevó a buscar la intervención jurisdiccional.

De acuerdo a la anterior, tomando también como fundamento la providencia expedida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, referenciada por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, es palmario para este juzgado que a la especialidad civil la jurisdicción ordinaria se le ha otorgado la competencia únicamente para conocer los procesos ejecutivos derivados de las relaciones contractuales del sistema seguridad social, más no para los procesos declarativos, tal y como sucede en el *sub judice*, razón por la cual procederá este Despacho a declarar el conflicto negativo de competencia para que sea resuelto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán.

Por las razones expuestas, el JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE POPAYAN,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** DECLARAR el conflicto negativo de competencia dentro del presente proceso con el JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS

---

*sus elementos constitutivos. **En otros términos la claridad de la obligación se contrapone a la ambigüedad, a la oscuridad, o a la duda y a la confusión.***

*En consecuencia cuando se indica que la obligación debe ser clara, tal afirmación alude fundamentalmente a tres aspectos característicos: 1. Que la obligación sea inteligible, para dar a entender que el documento que la contiene debe estar redactado lógico y racionalmente. 2. Que la obligación sea explícita, característica que implica una correlación entre lo expresado, lo consignado en el respectivo documento con el verdadero significado de la obligación. 3. Que la obligación sea exacta, precisa, pues con el documento se quiere dar a entender que el objeto de la obligación y de los sujetos que en su elaboración intervienen, se encuentran bien determinados, valga decir, la exactitud y precisión se predicen tanto del contenido de la obligación como de las personas que hacen parte de su emisión. 4. Que haya certeza en relación con el plazo de la cuantía o tipo de obligación, **o que esta se puede deducir con facilidad**. En este sentido no podrá decirse que una obligación es clara cuando contiene términos que se prestan a confusión o equivocación, ni cuando aparezca de su contenido contradicciones o ambigüedades". (Resaltado fuera de texto).*

LABORALES, de conformidad a lo establecido en el artículo 139 del C.G.P.

**SEGUNDO:** REMITIR el presente proceso al TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN para que resuelva el conflicto negativo de competencia mencionado en el numeral anterior.

**NOTIFIQUESE<sup>2</sup> Y CUMPLASE**

**Firmado Por:**

**Victor Fabio De La Torre Vargas**

**Juez**

**Juzgado Pequeñas Causas**

**Juzgados 002 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples**

**Cauca - Popayan**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**d5ca596a7cd3d291e15ce30cfd2c4811d3d615faea66ac5e23945  
27e2b7189af**

Documento generado en 21/09/2021 03:17:48 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

---

<sup>2</sup> La presente providencia se notifica en estado 99 del 22 de septiembre de 2021